GRISUR

Grupo de Información
y Solidaridad Uruguay
Case postale 92
1211 Genève 4
SUISSE

Nº 68

31 de mayo de 1977

Compte Nº 12-14847

INFORMACIONES

1. EL PARLAMENTO EUROPEO RECLAMA LA AMNISTIA PARA TODOS LOS PRESOS POLITICOS URUGUAYOS, GARANTIAS PARA LOS REFUGIADOS EN ARGENTINA Y EL RESTABLECIMIENTO DE LAS LIBERTADES.

Los senadores Enrique Erro y Enrique Rodríguez asistieron, especialmente invita-

dos, a la reunión del Parlamento Europeo que tuvo lugar este mes en Estrasburgo. Al término de las conversaciones mantenidas con ambos dirigentes uruguayos, los parlamentarios europeos decidieron reiterar su preocupación por la situación política uruguaya, por la violación sistemática de los derechos humanos y, en especial, por la prisión de seis mil ciudadanos; invitar a sus respectivos partidos políticos a que elaboren un proyecto de resolución sobre la situación política uruguaya que pueda examinarse en la próxima reunión del Parlamento Europeo; plantear su preocupación por la situación uruguaya en oportunidad de la Conferencia Interparlamentaria que reunirá a los Parlamentos Europeo y Latinoamericanos, a celebrarse en México del 25 al 29 de julio, y en el encuentro que mantendrá el Parlamento Europeo con una delegación del Congreso de los Estados Unidos; y manifestar esta misma preocupación en el seno de los respectivos Parlamentos nacionales.

Asimismo, se acordó reclamar la intervención de las instituciones europeas encargadas de la defensa de los derechos humanos, de las organizaciones sindicales y de los partidos democráticos europeos para obtener la amnistía para todos los presos políticos uruguayos, para exigir que los refugiados políticos uruguayos trasladados ilegalmente a las cárceles de su país sean sometidos a las autoridades internacionales competentes y que se garantice la vida y la integridad de los que han desaparecido en la Argentina, y para exigir el restablecimiento de todos los derechos y libertades democráticas en el Uruguay.

Por otra parte, el Presidente del Parlamento Europeo, Sr. Emilio Colombo, recibió a los senadores uruguayos Enrique Erro y Enrique Rodríguez y les confirmó que dicha organización hará todo lo posible para que en la reunión de México puedan participar, como observadores, representantes de los diversos parlamentos latinoamericanos que han sido disueltos.

2. VERSIONES SOBRE UN CAMBIO DE FACHADA.

La publicación inglesa "Latin America" recoge, en su edición del 13 de mayo, versiones —precedentes "tanto de fuentes políticas como militares"— según las cuales antes de fin de año el Uruguay estará gobernado por una junta cívico-militar integrada por el Dr. Justino Jiménez de Aréchaga, que la presidirá, otros dos civiles —uno designado por el Partido Colorado y otro por el Partido Nacional— y dos militares nombrados por la Junta de Co-

mandantes en Jefe. La información, que también fue difundida por la agencia de noticias Interpress Service, indica que Jiménez de Aréchaga habría puesto como condición la de contar con una total libertad de acción, tanto en las etapas previas a la constitución de la junta como en el desempeño de la presidencia de la misma.

Siempre de acuerdo con estas versiones, la junta tendría un carácter provisional y su cometido sería preparar el "retorno a la democracia". No estaría aún definido el período de actuación de la junta. Se encargaría, además, la sustitución del actual Consejo de Estado, cuyos miembros han sido designados directamente por la dictadura, por otro cuyos integrantes serían nombrados por los dos partidos tradicionales, que previamente serían autorizados a funcionar. En cuanto a las demás organizaciones políticas, se indica que también se autorizaría el funcionamiento del Partido Demócrata Cristiano y que, respecto de los otros partidos integrantes del Frente Amplio, la decisión sería tomada posteriormente por la propia junta, ya que la discusión de ese tema en este momento "podría poner en punto cero las tratativas, lo cual nadie desea".

La iniciativa de la constitución de una junta cívico-militar contaría con el apoyo de los partidos tradicionales y de "un sector militar aparentemente mayoritario, pero sin mayor poder de mando". Las versiones añaden que los dos partidos tradicionales tendrían posiciones diferentes en lo que se refiere a la responsabilidad que cabe a los militares comprometidos con la dictadura; mientras que el Partido Nacional exigiría que fuesen "juzgados con todo el peso de la ley y sin ningún tipo de contemplaciones, especialmente aquellos que han participado en la tortura", el Partido Colorado sería partidario de "pasar por alto muchas actitudes, no así los delitos que se hayan cometido", por entender que "lo fundamental es lograr la senda que conduzca al país hacia la democracia representativa".

Siempre de acuerdo con las mismas fuentes, los militares habrían propuesto que los dos miembros civiles que acompañen a Jiménez de Aréchaga en la junta cívico-militar fuesen el Dr. Nicolás Storacce Arrosa, actual presidente interventor de la Corte Electoral, por el Partido Nacional, y el Ing. Alejandro Végh Villegas, ex Ministro de Economía y Finanzas y actual Consejero de Estado, por el Partido Colorado. Jiménez de Aréchaga habría rechazado ambas sugerencias de los militares.

Justino Jiménez de Aréchaga, abogado, ex catedrático de Derecho Constitucional (se retiró de la Universidad en 1958, por discrepar con la Ley Orgánica), fue uno de los candidatos a la Presidencia de la República por el Partido Colorado en las elecciones de 1971. Proscrito de sus derechos políticos en virtud del Acto Institucional Nº 4, fue uno de los primeros rehabilitados por la Comisión Interpretativa creada por dicho instrumento. Es un político conservador y siempre ha estado vinculado al diario "El Día". Con todo, como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA integró una comisión encargada de hacer un informe sobre Chile. Sus conclusiones, que ponían en evidencia las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Pinochet, disgustaron al gobierno uruguayo y, finalmente, Jiménez de Aréchaga debió renunciar al cargo que ocupaba en la OEA.

3. APARICIO MENDEZ OBTUVO PERMISO PARA PRONUNCIAR UN DISCURSO.

Si los discursos en ocasión de fechas históricas suelen quedar a cargo de coroneles, capitanes de navío o ministros de Estado y las definiciones de la política de la dictadura están reservadas al Comandante en Jefe del Ejército o a los Oficiales Generales, es natural que se designe al titular del Poder Ejecutivo para hacer los discursos en ocasiones tales como las inauguraciones de estadios deportivos en el interior del país.

Es lo que ocurrió el 21 en Paysandú. Pero esta vez se había anunciado oficialmente —por medio de un comunicado emitido días antes por la DINARP— que el Dr. Aparicio Méndez haría "importantes revelaciones sobre el futuro institucional del país y el proceso de reconstrucción nacional". La expectativa creada por ese anuncio se vio totalmente defraudada: Méndez habló durante dos horas, pero no dijo nada. Tal vez lo único importante —teniendo en cuenta las especulaciones en el sentido de que quizá anunciaría una apertura política— es que no lo hizo. Se refirió, en cambio, a las características que tendrá la nueva Constitución. "Será flexible, dijo, con pocos artículos, al estilo de la de los Estados Unidos; de ese modo se evitará que la reforma constitucional sea una bandera permanentemente agitada en cada campaña presidencial". En una conferencia de prensa ofrecida ese mismo día precisó, refiriéndose al mismo tema, que esa constitución regiría durante un "período de transición" y que si bien permitirá el funcionamiento de los dos partidos tradicionales (y sólo de ellos), dichos partidos no ejercerán ningún control sobre las funciones de gobierno que desempeñen sus miembros. No aclaró cuándo comenzaría ese período de transición ni cuál sería su duración, pero afirmó que la recuperación nacional tenía prioridad respecto de las elecciones, que podrían realizarse dentro de tres o cuatro años.

4. LAS VISITAS DEL SEÑOR PRESIDENTE.

Según lo convenido por los cancilleres Rovira y Guzzetti a fines de abril, el Gral. Jorge Rafael Videla se encontrará con Aparicio Méndez el 28 de junio, en Montevideo. Por otra parte, se anunció que Méndez visitará a Geisel en Brasilia, durante la primera quincena de julio. En esa oportunidad se firmarán sendos documentos sobre aprovechamiento de los recursos hídricos del tramo limítrofe del río Yaguarón (Paso Centurión y Paso Talavera) y de los recursos naturales de la Laguna Merim.

5. LAWRENCE PELUZO, NUEVO EMBAJADOR NORTEAMERICANO.

El gobierno norteamericano designó embajador en el Uruguay a Lawrence Peluzo. El reemplazante de Siracusa tiene 51 años, es un diplomático de carrera y es la primera vez que tendrá el cargo de Jefe de Misión. Hasta ahora se había desempeñado como enlace entre el Departamento de Estado y el Congreso. Ha estado acreditado en Viet-Nam, Bolivia, Colombia y Guatemala.

6. PURGA EN LAS FUERZAS ARMADAS. El 12 de mayo se aplicó por primera vez —y en forma masiva— la nueva causal que impone el retiro obligatorio a los oficiales que no gocen de la absoluta confianza de la superioridad. Esta causal había sido incorporada a la Ley Orgánica Militar tres semanas antes (ver "Informaciones", Nº 67).

El mayor número de retiros obligatorios se registró en la Marina, donde la medida se aplicó a alrededor de 40 contralmirantes y capitanes de navío. Corresponde señalar que en la Marina había entre 60 y 70 oficiales de esos grados, de modo que son menos de la mitad los que siguen en actividad. Según la agencia de noticias Associated Press, los afectados por la medida pertenecían al grupo de oficiales que, en febrero de 1973, había respaldado inicialmente a Bordaberry en oportunidad de los planteos que le formularan los jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea.

Se desconoce si ya se han producido retiros obligatorios en la Fuerza Aérea, mientras que —según algunas fuentes— se habrían dispuesto tres en el Ejército. Uno de ellos sería el del Gral. Hugo Chiappe Pose, que desde 1974 —cuando fue sustituido en la Comandancia en Jefe del Ejército por Vadora— se encontraba "a disponibilidad", es decir en actividad pero sin tener ninguna función a su cargo. No se conocen los nombres de los demás oficiales —tanto del Ejército como de la Marina— a los que se aplicó la nueva disposición de la Ley Orgánica Militar.

7. OTROS CAMBIOS EN LA MARINA. El Capitán de Navío César Reino Piotti, que desempeñaba la Jefatura del Estado Mayor Naval, fue designado Prefecto General Marítimo. El Capitán de Navío Rodolfo Invidio, que era Segundo Jefe del Estado Mayor Conjunto (ESMACO), sustituyó a Reinos como Jefe del Estado Mayor Naval. El Capitán de Navío Hugo de Barros fue nombrado Director General de Servicios de la Armada, mientras que el Teniente de Navío Juan Carlos Santoro pasó a ocupar la dirección de "Industria Lobera y Pesquera del Estado" (ILPE).

8. MARQUEZ INSISTE EN CREAR UNA "OTAS". El actual Comandante en Jefe de la Marina, Vicealmirante Hugo Márquez, había lanzado el año pasado la iniciativa de constituir una especie de Organización del Atlántico Sur, integrada por las armadas de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Sudáfrica y vinculada ideológica, política y tecnológicamente a la OTAN. El mes pasado, al asumir la jefatura de la Marina uruguaya, volvió a insistir en la idea y a mediados de mayo la expuso nuevamente, con mayores detalles, en una entrevista periodística. "Se trata, afirmó, de consolidar un grupo de unión colectivo" y dijo que ello era necesario teniendo en cuenta "el armamentismo soviético", al que se refiriera el presidente norteamericano Carter en Londres.

La idea viene siendo considerada desde hace meses a nivel de las fuerzas armadas de las dictaduras del Cono Sur.

9. RELACIONES DE LAS FFAA URUGUAYAS Y DE LOS EEUU. Al despedir al Gral. Queirolo, que partía a los EEUU, el Tte. Gral. Vadora dijo que había que mantener una "perfecta convivencia y buena relación, particularmente con las FFAA de los EEUU". Por su parte, Queirolo declaró: "Las FFAA del Uruguay y de los Estados Unidos tienen el mismo espíritu de lucha por las libertades y la justicia".

10. DESAPARECIO EN BUENOS AIRES Se denunció la desaparición,
UNA HIJA DE GERARDO GATTI. desde el 8 de abril, de Adriana

Gatti, refugiada uruguaya en la Argentina. Estudiante, de 17 años de edad, se encontraba embarazada de ocho meses. El gobierno de Francia le había concedido recientemente la visa para instalarse en ese país. Adriana es hija de Gerardo Gatti, dirigente sindical y político uruguayo secuestrado en Buenos Aires en junio de 1976, de quien no se tiene ninguna noticia.

11. DETIENEN AL EX DECANO DE VETERINARIA Trascendió que a prin
Y A OTROS PROFESORES UNIVERSITARIOS. cipios de mayo fueron

detenidos en Montevideo el Dr. Castillo, Decano de la Facultad de Veterinaria hasta la intervención de la Universidad, y entre 10 y 15 docentes que integraban los consejos directivos de varias facultades. No se conocen los nombres de los detenidos, los cargos que se les imputan ni la situación en que se encuentran actualmente. Corresponde señalar que el Dr. Castillo ya había estado detenido en 1973, cuando la intervención de la Universidad, conjuntamente con las demás autoridades universitarias. En el mismo expediente se encuentra el Dr. Mario dell'Acqua, ex Secretario de la Escuela Nacional de Bellas Artes, cuyo procesamiento fue dispuesto el año pasado por la justicia militar.

12. EL GRAL. BALIÑAS BAJO El General (R) Dr. Arturo Baliñas,
ARRESTO DOMICILIARIO. uno de los independientes que en 1970

hicieron el llamamiento para la constitución del Frente Amplio, fue sometido a un tribunal de honor militar y se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario.

13. ESTA MUY GRAVE JUAN La Federación Latinoamericana de Perio
CARLOS URRUZOLA. distas (FELAP) denunció que según noti

cias procedentes de Montevideo el 21 de mayo, el periodista uruguayo Juan Carlos Urruzola, de 65 años, que desde hace casi dos años se encuentra detenido, está en gravísimo estado de salud. La FELAP informa que Urruzola está recluido actualmente en el Cuartel de Artillería Nº 1 y que no se le ha prestado ningún tipo de asistencia.

14. NO HAY NOTICIAS DE VARIOS La publicación "Desde Uruguay"
TRABAJADORES DETENIDOS EN informa que Thelman Borges, de
LAS ULTIMAS SEMANAS. 33 años, dirigente del Congreso

Obrero Textil, fue detenido el 2 de abril por los Fusileros Navales, junto con otro compañero de trabajo, cuando se encontraban en la cola para cobrar sus sueldos. No se volvieron a tener noticias de Borges y la Marina sostiene que fue liberado el mismo día de su detención.

También se desconoce el lugar de reclusión de Ubagosner Chávez Sosa, obrero de la empresa CADHSA, detenido a principios de mayo.

Por lo que respecta a la situación de Julio Escudero, detenido el 5 de noviembre, la dictadura informó a la OIT -que había solicitado información sobre este caso- que su nombre nunca fue registrado como detenido. Su situación es similar a la del escribano Fernando Miranda, detenido en 1975, de quien tampoco se han vuelto a tener noticias.

15. APARECEN MAS CADAVERES EN LA COSTA URUGUAYA.

El 12 de mayo, en el balneario "El Caracolí", del departamento de Rocha, fue descubierto, semi-enterrado en la arena, el cadáver de una mujer. Según informaron a la prensa las autoridades actuantes, el cuerpo estaba decapitado, presenta ba diversas mutilaciones, le faltaban parte de las extremidades, tenía señales de torturas, presumiblemente también de vejaciones, y marcas de una atadura de alambre en una pierna. El médico foren se afirmó que el cadáver había permanecido mucho tiempo en el agua y que no era posible lograr su identificación.

Tres días más tarde apareció otro cadáver, esta vez en el balneario Anaconda, en las proximidades de La Paloma. Según el comunicado de la policía rochense, el cuerpo "se encontraba en avanzado estado de descomposición, siendo imposible determinar el sexo y la edad". Por su parte, el vecino que hizo el hallazgo declaró a la prensa que el cadáver apareció en la arena, que le faltaban los dos brazos y una pierna -que más tarde fue encontrada a 50 metros de distancia- y que aparentemente se trataba de una mujer, aunque no podía asegurarlo.

Se trata de los dos primeros cadáveres aparecidos en la costa uruguaya, en esas condiciones, en lo que va del año. Entre la segunda quincena de abril y la primera de junio del año pasado fueron encontrados 15 cadáveres a lo largo de la costa, entre los departamentos de Rocha y Colonia, que nunca fueron identificados. Los dos cuerpos encontrados este año aparecieron en la playa en días en que hubo vientos huracanados que soplaban hacia la costa; según comentarios periodísticos, de no haber mediado este factor climático, lo más probable era que las aguas los hubiesen arrastrado hacia el océano. Cabe entonces descartar la posibilidad de que estos 17 cuerpos aparecidos en la costa uruguaya en poco más de un año -más otros que se encontraron en la costa argentina- hayan sido los únicos arrojados a las aguas. ¿Por quién? La primera versión oficial (un comunicado del Comando General de la Armada uruguaya, emitido "a fin de evitar distintos comentarios que en casos de esta naturaleza se generan fácilmente") indicaba que habían sido "arrojados al mar desde un barco" y que se trataba de personas de "nacionalidad china o algún otro país asiático". La prensa de la dictadura trató, en un principio, de aderezar aún más esta fantástica hipótesis, inventando una orgía en alta mar -con drogas y todo- y un motín a bordo por "problemas de mujeres". Semanas después, hasta "El País" reconocía el origen político de estos repetidos hallazgos de cadáveres mutilados y con señales de tortura, siempre inidentificables para la policía. Decía ese diario, tímidamente, el 29 de mayo de 1976: "Es muy verosímil pensar que se trata de un resultado de la dramática situación por la que atraviesa el país vecino como consecuencia de la acción terrorista de diversos signos políticos que está soportando." Si se tiene en cuenta la enorme cantidad de militantes de izquierda, argentinos y uruguayos, desaparecidos en Buenos Aires y en Montevideo, y si se elimina el eufemismo sobre los "diversos signos políticos", la conjetura de "El País" se transforma en esta innegable afirmación: "No cabe duda de que se trata de un resultado de la represión política ejercida, en ambos márgenes del Río de la Plata, por las dictaduras argentina y uruguaya".

16. DESIGNACIONES EN EL SERVICIO DIPLOMATICO. Edmundo Narancio fue designado Embajador ante la ONU, en sustitución de Carlos Giambruno. Narancio fue Ministro de Educación y Cultura desde el golpe de Estado hasta el 7 de enero de 1975. Al decretarse la intervención de la Universidad ocupó además el cargo de rector interventor.

En ese período, Narancio fue acompañado en el Ministerio por el Dr. Carlos Alberto Roca, que tuvo el cargo de Subsecretario. Roca ahora acaba de ser designado embajador ante la CEA. Roca, que publicaba un pasquín anti-universitario llamado "Combate" y que hace más de 10 años fue procesado por delito de imprenta, es mencionado por Philip Agee como agente de la CIA.

Por otra parte, el presidente de la Cámara de Industrias, Edgardo Héctor Abellá, fue nombrado embajador en el Reino Unido; el Dr. Valentín Sánchez en Panamá y Nelson Miguel Marenales en Yugoslavia. Todavía no se han provisto los cargos de embajador en el Vaticano, Moscú, El Cairo, Asunción y la UNESCO.

17. PRIVATIZACIONES. El Poder Ejecutivo autorizó al Ministerio de Agricultura y Pesca a hacer un llamado a licitación pública para la venta del Frigorífico Fray Bentos, de acuerdo con las bases que elaboró el INAC.

Mientras tanto, se encuentra a estudio del Poder Ejecutivo la nueva ley de electricidad, que prevé que el Gobierno podrá autorizar la instalación y funcionamiento de empresas privadas proveedoras de energía a terceros.

La revista "Búsqueda", órgano del Ing. Alejandro Végh Villegas y el Dr. Ramón Díaz, la audición "Tomándole el pulso a la república" —que hace un tiempo fue comprada por el mismo grupo— y los diarios de la dictadura vienen llevando a cabo una campaña sobre la ineficacia de los entes comerciales e industriales del Estado y la conveniencia de que pasen a manos privadas.

18. DELEGACION A LA OIT. El Poder Ejecutivo designó la delegación que asistirá a la Conferencia Internacional del Trabajo, que tendrá lugar en Ginebra del 19 al 24 de junio. En calidad de representantes gubernamentales, fueron nombrados la Sra. Angela Chiola de Píriz Pacheco, Directora Nacional del Trabajo, que presidirá la delegación, Jorge Alvarez Olloniego, el Cnel. Clever Cabrera, la Dra. Celia Fernández, Pablo Bosch y Carlos Barros Oreiro. Por los empleadores asistirán el Ing. Carlos Végh Garzón, el Dr. Angel Caviglia y Roberto Schuhl. Para representar a los trabajadores, la dictadura eligió a Ariel del Gaudio (secretario general de la CGTU y vicepresidente de ORIT) y a Roberto Borrazás.

Corresponde señalar que a nivel del grupo de trabajadores de la OIT, desde la disolución de la CNT sus dirigentes han seguido siendo reconocidos como los auténticos representantes de los trabajadores uruguayos y asisten a las deliberaciones de la Conferencia. No pueden, en cambio, votar en el grupo de trabajadores ni asistir a las sesiones plenarias —que reúne a los representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores de todo el mundo— porque para ello reglamentariamente se exigen credenciales otorgadas por los respectivos gobiernos.

19. IMPRESIONANTE OLA DE AUMENTOS. Simultáneamente con el anuncio oficial de que no habrá aumento salarial, el Poder Ejecutivo dispuso, a lo largo del mes de mayo, una serie de importantes aumentos en los precios de varios artículos de primera necesidad y en las tarifas de diversos servicios públicos. Se trata de las mayores subas registradas en los últimos meses. Los siguientes son algunos ejemplos:
- Leche. El día 5 el precio del litro fue fijado en N\$ 0,90 (en el mostrador) y N\$ 0,93 (a domicilio). El aumento es del orden del 27,4 por ciento.
 - Aceite comestible. El 13 comenzó a regir el nuevo precio del aceite suelto, que fue aumentado en un 6 por ciento, y el del aceite envasado, cuyo incremento fue del 11 por ciento.
 - Tarifas de OSE, UTE y ANTEL. Al cierre de esta edición no se conoce la decisión del Poder Ejecutivo sobre las nuevas tarifas de los servicios de agua corriente, luz y teléfono, que en principio iban a ser fijadas a fines de mayo. Se anunció que los aumentos se cobrarían con retroactividad al 1º de mayo y se adelantó que el incremento sería del orden del 7 u 8 por ciento.
 - Boleto. La Intendencia Municipal de Montevideo está estudiando el nuevo precio del boleto. Trascendió que se aprobaría un incremento de alrededor del 15 por ciento. Las empresas habían solicitado que el aumento fuese del 18 al 20 por ciento.
 - Combustibles y bebidas de ANCAP. Se transcribe a continuación un cuadro con los nuevos precios de distintos productos de ANCAP que rigen a partir del día 3 de mayo. La penúltima columna indica el porcentaje del aumento dispuesto ese día; la última columna muestra el porcentaje de aumento experimentado por seis de los principales productos en el término de 10 meses, en que sufrieron cuatro subas.

	<u>Precio anterior</u>	<u>Nuevo precio</u>	<u>% último aumento</u>	<u>% aumento en 10 meses</u>
Supercarburante	2,31	2,49	7,79	36,81
Nafta común	1,83	1,97	7,65	36,81
Kerosene	0,95	1,06	11,58	68,25
Supergás	1,87	2,08	11,23	56,39
Gas-oil	0,90	1	11,11	66,67
Aguarrás	1,76	1,96	11,36	55,56
Diesel	739	821	11,10	
Fuel-oil	535	594	11,03	
Butano	3,41	3,79	11,14	
Whisky	14,19	15,61	10,01	
Grappa	4,29	4,72	10,02	
Caña	4,50	4,96	10,22	
Cognac	11	14,30	30	

20. SE ACENTUA LA CAIDA DEL SALARIO REAL. La Dirección General de Estadística y Censos, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, informó que en el primer trimestre de 1977 disminuyó en un 4,01 por ciento. De mantenerse este ritmo en el resto del año, el deterioro del salario real será superior al doble del registrado por esa misma repartición oficial el año pasado. Desde el 19 de enero al 31 de marzo, la pérdida del salario real de los funcionarios públicos ha sido del 4,20 por ciento, mientras que para los trabajadores del sector privado se sitúa en el 3,83 por ciento.

Si se considera el período 19 de abril de 1976 - 31 de marzo de 1977, la pérdida del salario real llega al 9,36 por ciento. En esos doce meses el sector más afectado ha sido el de los trabajadores privados, cuyo poder adquisitivo se redujo en un 10,72 por ciento. En el mismo período, el salario real de los funcionarios públicos disminuyó en un 7,83 por ciento.

En una reciente entrevista periodística, Wilson Ferreira Aldunate, luego de poner en duda la veracidad de las estadísticas oficiales, afirmaba que "en realidad, en los últimos seis años, el salario real debe haber bajado más de un 40 o un 45 por ciento". Y añadía que al analizar el deterioro del salario real del sector público, aun basándose en las cifras oficiales, es necesario tener en cuenta que en dicho sector están comprendidos los militares, cuyo poder adquisitivo sí ha ido aumentando considerablemente y que además constituyen hoy un número importante. Rección entonces, afirma Ferreira, se advierte la verdadera magnitud de la pérdida del salario real experimentada por los funcionarios públicos que no son militares, y que es, en consecuencia, muy superior a la que publicitan las dependencias oficiales.

21. COSTO DE VIDA: SUBIO CASI UN 20 % EN CUATRO MESES. Según la Dirección General de Estadística y Censos, el aumento del costo de vida registrado en abril fue del 3,55 por ciento. En los cuatro primeros meses del año, de acuerdo con la misma fuente, el incremento llega al 19,11 por ciento. En los cuatro primeros meses de 1976 el costo de vida había aumentado casi cuatro veces menos (5,30 por ciento).

El Ministro de Economía y Finanzas, Valentín Arismendi, reconoció finalmente que "el aumento del costo de vida amenaza dejar atrás la meta señalada para 1976, que era del 30 por ciento".

22. NO HABRA AUMENTO SALARIAL. Un comunicado oficial, emitido por la SEPLACODI, precisa que "no existe por el momento una decisión que permita esperar a corto plazo una modificación salarial de carácter general". La aclaración, tendiente a desvirtuar los insistentes rumores sobre la inminencia de un aumento de salarios (fundados, por lo demás, en anteriores promesas de la dictadura), fue formulada pocos días después de que el Ministro Arismendi declarara a la prensa que "todo incremento salarial produce un recrudescimiento inflacionario". En la misma oportunidad, Arismendi dijo que "el empresario que quiera dar incrementos salariales a sus trabajadores puede hacerlo", lo que supone un cambio sustancial en la política salarial seguida por la dictadura en los últimos años.

23. LECHE Y ZAPATOS: DOS INDICES SOBRE EL CONSUMO URUGUAYO. A principios de la década del 70, el consumo de leche en Montevideo se situaba entre 980 mil y un millón de litros. Ahora, con una población mayor, en la capital se consume aproximadamente la mitad de leche que hace siete años. (Declaraciones formuladas por el Sr. Alberto Mallarino, directivo de Conaprole).
- Hace 20 años, el consumo anual de zapatos en el Uruguay era de cinco pares por habitante; hoy el promedio arroja un solo par. (Declaraciones de dirigentes de la recientemente creada "Unión de la Industria de Curtiduría y Calzado para la Defensa del Mercado Interno", quienes informaron también que en los últimos seis meses el precio del cuero aumentó un 120 por ciento y que se triplicaron los valores de comercialización del cuero crudo).
24. LA COLOCACION DE LA CARNE. En fuentes oficiales se informó que ya está colocada toda la producción exportable de carne del primer semestre de 1977, pero que hay temores de que no suceda lo mismo en el segundo semestre. Este mes hubo dos misiones a Europa para realizar nuevas ventas. Por un lado, dirigentes de la Cámara de la Industria Frigorífica viajaron con ese fin a Portugal; por otro, el Vicepresidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Eduardo Peile, realizó una gira por España, Portugal, Francia y Suiza.
- Según informaciones suministradas por el INAC, en el mes de marzo se obtuvo el promedio más alto de precio por tonelada exportada desde julio de 1975. En ese mes se había alcanzado el precio récord de 1.114 dólares por tonelada; luego el precio internacional de la carne bajó sensiblemente (las exportaciones uruguayas de 1976 registraron un promedio de 731 dólares por tonelada). En marzo último el precio promedio fue de 974 dólares.
- También de acuerdo con informaciones del INAC, en el primer trimestre de 1977 los principales compradores de carne uruguaya fueron Brasil (8.952 toneladas), Egipto (4.266), Portugal (3.552) y España (3.401). En ese mismo período, los otros dos países visitados ahora por Peile, Francia y Suiza, habían adquirido, respectivamente, 1.019 y 127 toneladas.
25. LA AURORA Y CAMPOMAR VENDEN FRAZADAS A CHINA NACIONALISTA. Para el equipamiento de sus fuerzas armadas, el régimen de Taiwan compró 208 mil frazadas a la firma uruguaya La Aurora y otras 60 mil a Campomar. Se informó que el monto de la operación realizada con La Aurora es de uncs 3 millones de dólares.
26. ENCARAN IMPORTACION DE ENERGIA ELECTRICA ARGENTINA. Autoridades de UTE informaron que, debido a que la represa de Salto Grande no producirá energía hasta 1979, para el año próximo será necesario establecer una línea aérea de interconexión eléctrica desde Concepción del Uruguay a Paysandú, a fin de obtener un apoyo energético de, por lo menos, 50 mil kilowatts. Añadieron que si la interconexión no está concretada antes del próximo invierno, el Uruguay se verá enfrentado a un déficit energético de graves consecuencias.

27. NUEVO INFORME DE LA OIT. El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acaba de aprobar el nuevo informe sobre la situación sindical en el Uruguay presentado por el Comité de Libertad Sindical de dicha organización el 26 de mayo. En este informe se han tenido en cuenta las denuncias formuladas por la Federación Sindical Mundial (FSM), la Confederación Sindical Mundial (CSM), otras organizaciones sindicales y varios representantes que participaron en la Asamblea Mundial de la OIT celebrada en 1976, así como también el informe producido por el representante del Director General de la OIT, Sr. Philippe Cahier, que visitó el Uruguay del 12 al 22 de abril de 1977. El envío de este alto funcionario había sido resuelto el año pasado por el Consejo de Administración que, en esta última reunión, decidió no enviar, por el momento, ninguna nueva misión de investigación.

Corresponde señalar que la consideración de la situación sindical en el Uruguay se realiza a nivel del Consejo de Administración de la OIT, y no de la Asamblea, que se reunirá del 19 al 24 de junio en Ginebra. Se transcriben a continuación las conclusiones del informe aprobado por la OIT.

"11. El Comité observa, en primer lugar, que la situación legal en lo que concierne a los sindicatos aún no ha cambiado y sigue siendo la misma que en ocasión de la primera misión realizada por el representante del Director General. Lo que sí se ha modificado es la situación de hecho según se trate de los sindicatos afiliados a la Confederación General de Trabajadores del Uruguay (CGTU) o a la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), organización esta última que había sido disuelta por el Gobierno después del cambio de régimen en 1973 y con respecto a la cual los empleadores uruguayos tienen serios reparos por los métodos que había empleado. Mientras que la posición de los primeros ha mejorado, pudiendo desarrollar ciertas actividades internas (reuniones, elecciones, etc.), los segundos parecen haber quedado en gran medida inactivos, y muchos de sus dirigentes están detenidos, o salieron del país o fueron despedidos. Los locales de ciertos sindicatos de la CNT están custodiados por la policía, clausurados, intervenidos, etc. En lo que se refiere a las actividades en el marco de las relaciones laborales, el grado de reconocimiento de los sindicatos de la CGTU y sus dirigentes depende de la buena disposición de los empleadores o los jefes de la respectiva administración pública. Los sindicatos de la CNT, en cambio, no parecen ser reconocidos ni en el sector privado ni en el público.

12. El Gobierno ha reiterado su preocupación por volver a una situación sindical normal. Según él, la demora en adoptar una nueva legislación sindical sería el resultado del descubrimiento de ciertas actividades de preparación subversiva, incluyendo depósitos de armas (con participación de diversos sindicalistas), la crisis política de 1976, el hecho de que el Gobierno considere que el problema sindical es sólo parte del problema más general de las instituciones políticas del país y consideraciones de tipo económico, según las cuales el receso sindical y la paz laboral han permitido ciertos progresos en el campo económico. El Go

bierno declaró que estaba preparando una nueva legislación en materia sindical, cuyos lineamientos de base son examinados actualmente, y que esperaba realizar progresos en el curso del corriente año.

13. El Comité recuerda que consideraciones de carácter político y económico ya habían sido señaladas anteriormente, durante la primera misión del representante del Director General, como motivos de las restricciones impuestas a los sindicatos y sus actividades. El Comité no puede sino expresar su preocupación por el hecho de que estas consideraciones aún impidan la normalización del movimiento sindical. El Gobierno posee, en efecto, diversos medios legales para hacer frente a eventuales actividades subversivas por parte de determinadas personas. En lo que se refiere al problema de las instituciones políticas del país, así como su evolución en el futuro, el Comité considera que las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen sus propias funciones específicas que cumplir, ya que su objeto es fomentar y defender los intereses profesionales de sus afiliados. En todo caso, tal como lo establece la resolución de 1952 sobre la independencia del movimiento sindical, toda relación o acción política de los sindicatos no deberían ser de naturaleza que comprometan la continuidad de un movimiento sindical o de sus funciones sociales y económicas, cualesquiera sean los cambios políticos que puedan sobrevenir en un país. En cuanto al aspecto económico, las exigencias del desarrollo no deberían justificar que se mantenga a todo el movimiento sindical de un país en una situación irregular desde el punto de vista legal, impidiendo así que los trabajadores puedan ejercer sus derechos sindicales y que las organizaciones desarrollen normalmente sus actividades. Un desarrollo económico y social equilibrado requiere la existencia de organizaciones fuertes e independientes que puedan participar en este proceso. El Comité toma nota, a este respecto, de que tanto los miembros del Gobierno entrevistados por el representante del Director General, como los medios patronales, expresan que es necesario tener por interlocutores a sindicatos que defiendan los intereses profesionales de los trabajadores.

14. El Comité es de opinión también que tanto las autoridades como los empleadores deben evitar toda discriminación entre las organizaciones sindicales, especialmente en cuanto al reconocimiento de sus dirigentes a los fines de sus actividades legítimas. Al respecto recuerda que, por un lado, los trabajadores y sus organizaciones están obligados a respetar la legalidad y, por el otro, la legislación nacional no deberá menoscabar ni ser aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas en el Convenio Nº 87. Al desfavorecer a determinadas organizaciones, siempre que éstas se dediquen a actividades sindicales legítimas, un gobierno puede influir en el ánimo de los trabajadores en cuanto a la elección de las organizaciones a que piensan afiliarse, y si obrase así con propósito deliberado atentaría contra la norma del Convenio según la cual los trabajadores tienen derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones. En relación con esta cuestión, el Comité observa, por ejemplo, que un local sindical continúa clau

surado a pesar de que varias personas que habrían participado en actividades ilícitas dentro del mismo fueron luego puestas en libertad por el juez militar; que otros locales permanecen custodiados, clausurados, intervenidos, etc., a pesar del tiempo transcurrido desde los hechos que dieron lugar a su allanamiento; que ningún dirigente de los sindicatos de la CNT es reconocido, en la práctica, ni por las autoridades ni por los empleadores; que algunos de estos dirigentes han sido detenidos repetidas veces como consecuencia de gestiones de naturaleza sindical; o que todos o varios miembros directivos sindicales fueron despedidos de su empleo.

15. Esta es la situación que se presentó, por ejemplo, en la empresa ANCAP, a la que se refiere la queja de la Unión Internacional de los Sindicatos de la Industria Química, del Petróleo y Similares. De la respuesta del Gobierno se desprende que todos los miembros, salvo uno, de la directiva de la Federación de Trabajadores de ANCAP fueron despedidos por haberse eliminado las funciones que desempeñaban, a raíz de la privatización o la reestructura de los respectivos servicios, no pudiendo ser ubicados en otros puestos de la empresa. El otro miembro fue despedido por faltar a su trabajo. Cabe señalar que varios miembros de esta directiva habían estado anteriormente en disponibilidad durante tres años, situación en la cual continuaban percibiendo sus salarios pero debían permanecer en sus domicilios durante las horas de trabajo y les estaba prohibido ingresar a sus lugares de trabajo.

16. El Comité observa que las comisiones paritarias establecidas por decreto de 15 de febrero de 1977 aún no han sido creadas en la práctica. Según el Gobierno, estas comisiones deben comprenderse como una etapa hacia la promulgación de la legislación sindical. Si bien el Comité considera que estas comisiones no pueden reemplazar a las organizaciones sindicales, también estima que los representantes de los trabajadores en las mismas deberían ser elegidos libremente, sin poder ser removidos a menos que hubieran cometido algún delito o realizado actividades ilegales que fuesen perjudiciales para el desempeño de sus funciones en el seno de las comisiones paritarias.

17. En lo que concierne a la detención de sindicalistas, el Comité observa, ante todo, que, según el informe del representante del Director General, disminuyó el número de detenciones por cuestiones vinculadas a actividades sindicales. Dicho informe contiene detalles sobre una de las cuestiones que el Comité había planteado repetidas veces en el pasado, es decir, los hechos específicos de que se acusa a los sindicalistas que continúan detenidos. A tal efecto pudo examinar los expedientes de quince personas: Camilo Viña, Víctor Cayota, Freddy Delgado Larrosa, Luis Güidotti, Omar Genovese, Eugenio Bentaberry, Didasko Pérez, Jaime Gerschuni Pérez, Carlos Coitiño, Carlos Fasano, Juan José Ormaechea, Jorge González, Enrique Rezzano, Enrique Rubio y Antonio Marotta. También pudo entrevistar a cinco detenidos: Gerardo Cuesta, Jaime Gerschuni Pérez, Luis Iguini, Héctor Rodríguez y Vladimir Turiansky.

18. En los casos relativos a cinco de estas personas (Camilo Viña, Víctor Cayota, Freddy Delgado Larrosa, Luis Güidotti y Omar Genovese) se habían dictado sentencias en las que se decretaba la libertad de cuatro de los interesados. Tres de ellos habían sido detenidos por cuestiones que podrían considerarse como vinculadas a actividades sindicales (administración de un fondo de solidaridad de profesores). Camilo Viña fue condenado en relación con este tipo de actividades, pero por el delito de vilipendio de las fuerzas armadas.

19. En los casos restantes, el representante del Director General concluye que las informaciones obtenidas, aunque incompletas, permiten pensar que las acciones penales promovidas por las autoridades están dirigidas primordialmente contra actividades de tipo político que el Gobierno considera peligrosas para la seguridad o el orden público. No obstante, agrega, parece que algunas de las acusaciones están vinculadas con actividades de la CNT, disuelta por el Gobierno en 1973. Las actividades de tipo político a que se refiere son la asociación en organizaciones o agrupaciones subversivas, la conspiración y actos preparatorios para atacar contra la Constitución. En todos estos casos aún no se dictó sentencia.

20. Por otra parte, el Gobierno suministró informaciones sobre una extensa lista de personas que estarían detenidas, suministrada por la Federación Sindical Mundial con fecha 18 de enero de 1977. Tales informaciones, en cuanto conciernen a nuevos nombres mencionados por la FSM figuran en anexo.

21. El Comité toma nota de las informaciones aportadas por el representante del Director General con respecto a los alegatos sobre malos tratos a sindicalistas detenidos. Estas informaciones se refieren, en particular, a casos específicos que fueron llevados a su conocimiento, de sevicias físicas infligidas a detenidos que ulteriormente resultaron acusados de delitos de asociación subversiva o asistencia a la asociación subversiva. Los malos tratos parecen haber sido infligidos en el período de los interrogatorios, sobre todo a personas a quienes se atribuye una participación activa en movimientos considerados como subversivos. Por otra parte, prosigue el informe, no podría afirmarse que se haya tratado de prácticas sistemáticas. Según las autoridades, ha habido casos de funcionarios sancionados por tales hechos y, con respecto a un detenido que fue muerto, el guardián responsable estaba siendo procesado por homicidio culpable.

22. El Comité debe expresar su fuerte reprobación por todo vejamen o sevicia infligidos a cualquier detenido y señalar la importancia que siempre ha atribuido al derecho de los sindicalistas, así como de cualquier otra persona, a gozar de las garantías de un procedimiento judicial regular, de conformidad con los principios contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité ya se ha referido a la cuestión de malos tratos en su 153er. informe, después de la primera visita del representante del Director General. En esta nueva oportunidad, el Comité debe insistir en que el Gobierno adopte todas las medidas necesarias, incluyendo no sólo instrucciones específicas, sino también sanciones ejemplares, para asegurar que ningún dete

nido sea sometido a malos tratos. A este respecto, el Comité toma nota de que, según se indicara al representante del Director General, las autoridades están realizando esfuerzos para inculcar a todos los funcionarios policiales el buen trato en los interrogatorios y en todas las demás circunstancias.

23. En estas condiciones, el Comité recomienda al Consejo de Administración:

- a) en lo que se refiere a la situación sindical, que señale a la atención del Gobierno las consideraciones que figuran en los párrafos 13 y 14, y que le inste a permitir cuanto antes la normalización de esta situación, adoptando a este efecto una legislación que esté en conformidad con los convenios ratificados por el Uruguay;
- b) con respecto a las comisiones paritarias, a reserva de las consideraciones expuestas en el párrafo 16, que señale la importancia de que se asegure la libre elección de los representantes trabajadores en estas comisiones;
- c) con respecto a la detención de sindicalistas, que tome nota de las informaciones suministradas por el Gobierno al representante del Director General sobre los hechos imputados a los detenidos y que, según el Gobierno, están relacionados con actividades de tipo político; que tome nota también de que diversos sindicalistas procesados fueron puestos en libertad por la justicia;
- d) que señale, sin embargo, la importancia de que ninguna persona sea detenida por sus actividades sindicales; y que solicite del Gobierno el envío, en cuanto esté disponible, del texto de las sentencias, con sus considerandos, que se dicten con respecto a las personas aún no juzgadas a que se refiere el párrafo 17;
- e) que tome nota de que hubo aún varios casos de sevicias infligidas a detenidos; que tome nota también de la declaración del Gobierno de que se están realizando esfuerzos para inculcar a los funcionarios policiales el buen trato a los detenidos; y que reitere la importancia de que el Gobierno adopte todas las medidas necesarias, incluyendo no sólo instrucciones específicas sino también sanciones ejemplares, para asegurar que ningún detenido sea sometido a malos tratos;
- f) que decida, teniendo en cuenta las informaciones aportadas por el representante del Director General, que no tendría objeto en esta etapa del procedimiento crear una comisión de encuesta en relación con la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución;
- g) que solicite del Gobierno el envío, a más tardar para el 15 de octubre de 1977, de informaciones sobre la evolución de la situación y la legislación sindical, y que mientras tanto tome nota de este informe provisional."

28. EL LOCAL DEL UNTMRA ES AHORA UNA COMISARIA.

La seccional 12 de la Policía de Montevideo se mudó a la sede de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines (UNTMRA), que desde hacía ya tiempo venía siendo utilizada por fuerzas policiales.

29. ANTISEMITISMO.

La Sra. Beate Klarsfeld, dirigente de la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo hizo llegar al gobierno uruguayo una protesta por el empleo de "métodos represivos cuyo macabro balance no pueden dejar indiferente a la opinión pública internacional". Si bien en esta protesta no se denuncian casos concretos de antisemitismo, debe tenerse en cuenta que se produce pocas semanas después de la detención del presidente de la Asociación Médica Israelita y varios médicos de esa mutualista. En efecto, en el mes de marzo fueron detenidos el Sr. Osías Furman, presidente de dicha entidad y los médicos Bernardino Zajak, Jaime Dorf y Tujman. Y en los mismos días también fueron detenidos Fritz Schapira, propietario de una imprenta y Saúl Zalkind, empleado. Todos ellos están recluidos en la Prefectura Naval.

30. MULTINACIONALES EN EL URUGUAY.

En la última semana de marzo se realizó en Montevideo un seminario sobre empresas multinacionales dirigido por dos profesores de la Universidad de Nueva York, Robert Hawkins e Ingo Walter.

Según los datos suministrados durante la reunión, actuarían en el país 43 empresas multinacionales (15 de origen norteamericano y las restantes de Alemania Federal, Suiza, Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Argentina, Canadá y Suecia). Las actividades de estas empresas se desarrollan, sobre todo, en los siguientes sectores: petróleo, industria farmacéutica, maquinaria y equipamiento, textiles, comestibles y refrescos, equipos de oficina, industria automotriz y electricidad.

Siempre de acuerdo con las informaciones manejadas en el seminario, las multinacionales emplean en el Uruguay a 10 mil 546 trabajadores, lo que representa el 1 por ciento de la población activa del país, estimada en 1 millón de personas. Los tres sectores que emplean más personal son: comestibles y refrescos (3 mil 45 empleados), textiles (3 mil) e industria farmacéutica (mil 130).

A LAS ORGANIZACIONES POLITICAS

El GRISUR recuerda a todas las organizaciones políticas uruguayas que luchan contra la dictadura la invitación formulada en el No 66 de "Informaciones" para que difundan sus posiciones desde una nueva sección de este boletín.

El 15 de junio vence el plazo de recepción de los documentos referentes a la caracterización de la dictadura.